

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Talca  
CAUSA ROL : C-3476-2018  
CARATULADO : CANCINO/FISCO DE CHILE - MINISTERIO DE  
ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO/ SERVICIO NACIONAL DE  
TURISMO.

Talca, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

**VISTO:**

Que a folio 1, con fecha 14 de noviembre de 2018 comparece **ANSELMO ANTONIO CANCINO SEPULVEDA**, chileno, trabajador social, Cédula Nacional de Identidad N°14.289.998-1, domiciliado en Avenida Las Flores N°1949, ciudad de Los Valles, comuna de Pudahuel, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario civil en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por el abogado Procurador Fiscal don José Isidoro Villalobos García Huidobro, domiciliado en calle 1 Poniente con 1 y 2 Sur N° 1055 de Talca, fundada en los siguientes antecedentes:

Que consta en el juicio criminal sustanciado ante el Ministro de Fuero, don Alejandro Solís Muñoz, Causa Criminal Rol N°2182-98, que con fecha 03 de abril del año 2008 se dictó sentencia definitiva condenatoria, en la cual se condenó a Claudio Abdón Lecaros Carrasco, Antonio Aguilar Barrientos y Félix Renato Cabezas Salazar por el delito de secuestro en la persona de Anselmo Antonio Cancino Aravena, entre otros. Dicha sentencia condenatoria, fue objeto de recurso de apelación, siendo confirmada la condena por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago.

Agrega, que la resolución dictada por la Iltna. Corte de Apelaciones fue objeto de sendos recursos de casación, seguido ante la Excm. Corte Suprema de Justicia, la cual dictó la correspondiente sentencia definitiva de término con fecha 27 de abril de 2011, en virtud de la cual se anuló de oficio el fallo del Tribunal de Alzada, y dictándose sentencia de reemplazo, determinó que la pena impuesta a Juan Hernán Morales Salgado, Félix Renato Cabezas Solazar, Claudio Abdón Lecaros Carrasco y Amonio Aguilar Barrientos, se les redujo a cada uno de ellos a la única temporal de 5 años de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales de



«RIT»

Foja: 1

inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de cada condena, así como al pago de las costas de la causa, por su responsabilidad de coautores, en el caso de Morales Salgado, en los delitos reiterados de secuestros calificados en las personas de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Solazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt y José Gabriel Campos Morales, perpetrados entre los meses de septiembre y octubre del año 1973 en la comuna de Linares; a Lecaros Carrasco, en los delitos reiterados de secuestro calificado en las personas de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravcna, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Robinson Mella, cometidos entre los meses de septiembre, octubre y diciembre de 1973, así como en enero y febrero de 1974 en la ciudad de Linares; al acusado Aguilar Barrientos, en los delitos reiterados de secuestro calificado en las personas de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravcna, Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores, verificados en el mismo tiempo antes indicado; y por último al condenado Cabezas Salazar, en los delitos reiterados de secuestro calificado en las personas de Anselmo Antonio Cancino Aravcna, José Gabriel Campos Morales y Alejandro Robinson Mella Flores, también llevados a cabo en el mismo lapso.

Las resoluciones judiciales anteriormente citadas han recaído en el proceso criminal en el cual se ha establecido la comisión de delitos de lesa humanidad respecto a don Anselmo Antonio Cancino Aravena, quien fue padre del demandante. En efecto, en la Causa Rol N°2.182-98 seguido ante el Ministro de Fuero Sr. Alejandro Solís, se acreditaron los siguientes hechos : “Anselmo Antonio Cancino Aravena, de 25 años, obrero agrícola, presidente del Movimiento Campesino Revolucionario y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue detenido ilegítimamente el 8 de Diciembre de 1973, en Cauquenes, sin proceso judicial pendiente alguno, por una patrulla militar que lo trasladó a la Escuela de Artillería de Linares y el 12 de Enero de 1974 fue sacado de ese lugar, junto a otros detenidos, perdiéndose todo rastro suyo hasta la fecha, sin que esta persona, ilegítimamente privada de libertad, haya tomado contacto con sus



«RIT»

Foja: 1

familiares, realizando gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción”.

Añade que su madre, Silvia Inés Sepúlveda Bueno, fue la pareja y conviviente por más de 7 años de su padre Anselmo Antonio Cancino Aravena. Señala que con su violenta detención y posterior desaparición, ella sufrió un dolor enorme por la pérdida de don Anselmo, quien era su pilar emocional. Su madre era secretaria general del Sindicato Obrero Agrícola "Luciano Cruz", y confirmó su estado de embarazo inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973. Por sus actividades políticas, tanto su padre como su madre fueron declarados prófugos, siendo requeridos en inmediata captura a pretexto que huían con abundante armamento y municiones. Ante la difícil y apremiante situación de embarazo de su madre, la que decidió llevarlo a buen término, ambos decidieron que ella se entregase lo que se efectuó el día 22 de septiembre de 1973 en el Buen Pastor de la ciudad de Linares. Tras enterarse de su entrega voluntaria, una patrulla militar procedió a detenerla y llevarla a la Escuela de Artillería de Linares, donde sufrió un período de tortura sistemática, vejaciones, golpes en su vientre e incomunicación por meses, solo se dirigían a ella para preguntarle el paradero de su pareja, situación que se mantuvo hasta la detención de éste en la misma Escuela de Artillería de Linares en diciembre del mismo año 1973. Es en esta época que el padre del demandante desaparece sin rastro alguno, lo que se mantiene hasta el día de hoy.

Así las cosas, al anunciarse su nacimiento, su madre fue trasladada en un jeep militar al Hospital de Linares, donde dio a luz bajo la presencia militar fuera del pabellón. Después del nacimiento, su madre volvió con él a la cárcel, donde fue cuidado por ella y varias de las demás reclusas políticas. Después de cumplir 9 meses de vida, su madre fue dejada en libertad condicional, por lo que se fueron a vivir al campo en el Fundo Santa Marta en Peñuelas, en la Comuna de Yerbabuenas.

De esta manera, indica que resulta evidente que todo el proyecto de familia que habían forjado sus padres se vio destruido sin remedio y en forma violenta por acción de terceros.



«RIT»

Foja: 1

Agrega, que no fue fácil crecer con una figura paterna ausente, que fue arrebatada por una acción criminal de agentes del Estado totalmente irracional y brutal, sin siquiera haber tenido la posibilidad de conocer, de jugar, de convivir y querer a su padre. Señala que creció con mucho miedo, resentimiento, incompreensión, sacrificio y dureza de la vida de campo, marcada por una niñez solitaria, carente de afectos y amor de padre. Nunca tuvo noticias, ni buenas, ni malas de su padre, lo que era como estar en el limbo del terrible e inhumano mundo de los detenidos desaparecidos. En este contexto, y debido a la precaria situación económica de su madre, desde muy pequeño tuvo que trabajar en fundos aledaños con otros campesinos, de temporero, sacando fruta desde muy temprano y teniendo que soportar la soledad y angustia permanente de no saber dónde se encontraba su progenitor, crecer sin su padre fue horrible.

Expresa que por referencias de su madre, tíos y su propio abuelo materno, don Juan Sepúlveda, ha sabido que su padre era cariñoso como pareja, y como preocupado como padre de sus hermanos. Ante su desaparición, su madre quedó en una situación económica lastimosa, y lamentablemente buscó una nueva pareja, quien abusaba física y psicológicamente de él. Todo esto hizo que su vida de niño fuera muy triste, de mucha soledad, pobreza espiritual y material, lo que me trajo enormes problemas de adaptación social.

Luego, la adolescencia no fue muy diferente, pues a la edad de 15 años abandonó su casa aburrido de los maltratos de su padrastro y la precaria situación económica en la que vivía, trasladándome solo y desamparado a Santiago, lugar donde vivió de allegado en una media agua que logró conseguir de parte de una pobladora. Sufrió hambre, frío y soledad, teniendo que trabajar como limpiador de micros, recogiendo boletos para después venderlos a los propios conductores, limpiaba el piso y vidrios de las máquinas de la línea 25 "Einstein - Santa Rosa".

Posteriormente, a los pocos meses, logró reincorporarse solo de sus estados de tristeza, angustia y desolación logrando ingresar al colegio Alberto Blest Gana, donde su apoderado era una pobladora del lugar. Añade, que recién a los 16 años pudo ver una foto de su padre, decidiendo en ese momento integrarse activamente a la investigación que pudiese



«RIT»

Foja: 1

determinar los responsables del secuestro, tortura y posterior desaparición de su padre.

Así, regresó al sur comenzando un trabajo activo en movimientos de derechos humanos involucrándome fuertemente en la investigación que permitiera aclarar y establecer la verdad, entrevistándome y trabajando activamente con el Juez Juan Guzmán Tapia en el año 1999.

En el año 2002, realizó diversas gestiones en el Programa de Derechos Humanos, logrando ingresar, en compañía y por orden del Juez Juan Guzmán Tapia, al polígono de tiro General Bari, específicamente al sector "Quebrada de las Rozas " lugar de instrucción y práctica militar de la escuela de artillería del Ejército.

En el año 2004, presentó una querrella en contra de Patricio Gualda Tiffaine y Ricardo Gaete Villaseñor quienes fueron director y subdirector respectivamente de la Escuela de Artillería de Linares en el año 1979, ambos con el grado de Teniente Coronel. La querrella apuntaba a establecer los hechos de las exhumaciones ocurridas en el Polígono de Tiro General Bari y en la Ciudad de Constitución entre los meses de enero y febrero de 1979.

Producto de muchos años de trabajo en el contexto de la investigación de las detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones, en el caso de supadre y sus compañeros, el 28 de abril de 2011 la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra de los agentes de la dictadura que corresponden al denominado Episodio Linares, dictando penas de presidio que van entre 3 y 5 años.

Por otro lado, dado que su padre y madre no eran casados, fue sometido a largos juicios para demostrar la filiación con su padre, y finalmente su abuelo paterno y numerosos testigos que el mismo buscó, declararon ante tribunales para que se estableciera formalmente la filiación y la calidad de hijo de Anselmo Antonio Cancino Aravena ante las comisiones que investigaban estos hechos en los años 90.

Por último, indica que el caso de su padre, Anselmo Antonio Cancino Aravena, forma parte del Informe Rettig, donde se da cuenta de éste como "detenido desaparecido" en los siguientes términos: "ANSELMO ANTONIO CANCINO ARAVENA Detenido desaparecido. Linares, enero



«RIT»

Foja: 1

de 1974. Anselmo Cancino, de 25 años. Soltero. Era obrero agrícola. Fue secretario de la Federación Nuevo Horizonte, delegado a la Central única de Trabajadores, presidente del Consejo Provincial Campesino, presidente del Movimiento Campesino Revolucionario y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Detenido en Cauquenes el 8 de diciembre de 1973, por una patrulla militar que lo trasladó a la Escuela de Artillería de Linares. El día 12 de febrero de 1974 fue sacado de la Escuela, junto a otros detenidos. Desde esa fecha se desconoce su paradero”.

Respecto a los fundamentos de derechos, expone que el Fisco de Chile, por su conducta claramente dolosa e intencional, provocó a través de sus agentes daños a su persona generando la debida responsabilidad civil, y debe ser condenado al resarcimiento de todos los daños y perjuicios ocasionados con el actuar de los agentes estatales mencionados. Consecuentemente con lo dicho, es responsable civilmente por la responsabilidad por el hecho ajeno que le afecta al Fisco de Chile respecto de sus agentes públicos.

De tal forma, la responsabilidad por los daños y el deber de reparación es prácticamente unánime en la doctrina como en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de justicia, con base a que la responsabilidad de los órganos del Estado por las lesiones que puedan causar afectando derechos de las personas, se funda en normas de Derecho Público y no de Derecho Privado como las que se derivan de las normas del Código Civil en materia de responsabilidad extracontractual, también llamada responsabilidad aquiliana. En el presente caso concurren dos fuentes normativas principales, una, es la propia Constitución Política del Estado, y la otra es de Derecho Público Internacional en materia de Derechos Humanos como es la que deriva de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sabiamente inspira por lo demás la sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Talca precedentemente citada.

Con fundamento a todo lo expuesto, demanda por concepto de reparación la debida indemnización de todos y cada uno de los perjuicios causados por la ilegítima y atentatoria desaparición forzada de su padre, no sólo porque obedece a un acto de funcionarios públicos realizados en su



«RIT»

Foja: 1

carácter de dependientes del Estado, sino porque se encuentra suficientemente acreditado que se trató de una práctica institucional estatal permanente, decidida por quienes lo controlaban, siendo responsable de la violación de los derechos constitucionalmente garantizados a la libertad, a la vida y a la integridad física y síquica. En la especie, se le ha privado grave y violentamente de la persona física y afectiva de su padre en todas las formas posibles, se desconoció la mínima posibilidad de conocerlo, de sentirlo, acariciarlo, de vivir y convivir con él, de desarrollar su vida a su lado, de condenarlo a la existencia de hijo póstumo de un “terrorista”, de un “extremista”, de aprender de su palabra y obras, en fin; todo ello, le ha causado no solamente una gran pena y dolor inimaginable, sino una gran depresión mental de toda índole y con repercusiones durante toda su vida.

En conclusión, solicita acoger la demanda de indemnización de perjuicios por el delito de lesa humanidad cometido por agentes del Estado, Félix Renato Cabezas Salazar, Claudio Abdón Lecaros Carrasco y Antonio Aguilar Barrientos, quienes causaron el secuestro calificado de Anselmo Antonio Cancino Aravena, a fin de que por concepto de acción reparatoria indemnizatoria el Fisco sea obligado a:

1.- Pagar a ANSELMO ANTONIO CANCINO SEPULVEDA la suma de \$500.000.000.- (Quinientos millones de pesos), o la suma que el Tribunal se sirva designar según el mérito del proceso, por concepto de indemnización de los perjuicios causados por el delito de lesa humanidad consistente en el secuestro calificado de don Anselmo Antonio Cancino Aravena, padre del demandante.

2.- Que se condena al Fisco de Chile a pagar las sumas establecidas en esta sentencia definitiva con todos los reajustes e intereses correspondientes según la Ley.

3.- Que se condena al Fisco de Chile a pagar las costas procesales y personales de la causa.

Que a **folio 7**, el 31 de enero de 2019, el Fisco de Chile a través de su Abogado Procurador Fiscal procedió a contestar la demanda.

Que a **folio 11**, el 11 de febrero de 2019, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica.



«RIT»

Foja: 1

Que a folio 13, el 18 de febrero de 2019, el Fisco de Chile evacuó el trámite de la dúplica.

Que a folio 18, el 21 de marzo de 2019, se recibió la causa a prueba rindiéndose la que consta en la carpeta electrónica.

Que a folio 66, el 25 de septiembre de 2019, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**I.- En cuanto a las tachas de testigos deducidas por el demandado:**

**PRIMERO:** Que a folio 31 el Fisco de Chile objeta a la testigo María Elizabeth Morales Silva, invocando la causal del N°7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, debido a que de los hechos relatados por la testigo se evidencia una relación de amistad íntima que se ha extendido por largos años y que llegó a un grado de intensidad importante al punto de actuar la testigo como apoderada del demandante en la ciudad de Santiago, además, reconoce que durante largo tiempo no supo de él pero que en la actualidad se están visitando, lo que demuestra la continuidad del vínculo. Agrega, que la intensidad del vínculo de la testigo con el demandante cuando este era niño, llegó a un punto tal que la relación adquirió un carácter duradero, que permanece por toda la vida.

**SEGUNDO:** Que el demandante solicita el rechazo de la tacha educida, pues no de los dichos de la testigo no se desprenden hechos graves constitutivos de la amistad íntima que exige la ley, señalando la testigo expresamente que “ahora apareció” el demandante, que hace 20 año no tenían contacto; ello, impide estar en presencia de una amistad íntima.

**TERCERO:** Que la tacha será desestimada, toda vez que la circunstancia de conocer a una persona por largo tiempo no significa necesariamente que exista una amistad íntima entre ellas, y de los dichos de la testigo no se evidencia el grado de intimidad en la amistad que exige la ley para configurar la inhabilidad. Abona lo anterior, el hecho de que el testigo declare que durante veinte años no se veían con el demandante y que solo en la actualidad han vuelto a verse o visitarse.

**II.- En cuanto al fondo:**





«RIT»

Foja: 1

**CUARTO:** Que cómo se reseñó, a folio 1, con fecha 14 de noviembre de 2018, compareció **ANSELMO ANTONIO CANCINO SEPULVEDA**, e interpuso demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario civil en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por el abogado Procurador Fiscal don **JOSÉ ISIDORO VILLALOBOS GARCÍA HUIDOBRO**, todos ya individualizados.

En suma, solicitó se condene al Fisco de Chile a: 1.- Pagar a **ANSELMO ANTONIO CANCINO SEPULVEDA** la suma de \$500.000.000.- (Quinientos millones de pesos), o la suma que el Tribunal se sirva designar según el mérito del proceso, por concepto de indemnización de los perjuicios causados por el delito de lesa humanidad consistente en el secuestro calificado de don Anselmo Antonio Cancino Aravena, padre del demandante.

2.- Que se condena al Fisco de Chile a pagar las sumas establecidas en esta sentencia definitiva con todos los reajustes e intereses correspondientes según la Ley.

3.- Que se condena al Fisco de Chile a pagar las costas procesales y personales de la causa.

**QUINTO:** Que a folio 7, comparece don **HERNÁN GONZÁLEZ DONAIRE**, Abogado Procurador Fiscal (s) de Talca del Consejo de Defensa del Estado, por el **FISCO DE CHILE**, contestando la demanda, y solicita su total rechazo, en virtud de las siguientes excepciones, defensas y alegaciones:

#### **I.- Marco general sobre reparaciones ya otorgadas.**

Señala que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión solo puede efectuarse al interior -y desde-, lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Solo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella



justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que aporten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Recordemos que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas.

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

En este sentido, indica que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.



De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

**A.) Reparación mediante transferencias directas de dinero.** Diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, siendo la 19.123 la más importante.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de:



«RIT»

Foja: 1

a) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig)

b) Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

c) Bonos: la suma de \$41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992; y

d) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco ha desembolsado la suma total de \$683.666.893.839.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual, es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Que, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

### **B.) Reparación mediante la asignación de nuevos derechos**

Señala que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.



«RIT»

Foja: 1

En este sentido, se concedió a los beneficiarios de leyes de reparación, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial PRAIS cuentan con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2015, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.718.319.-. Tal presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios Fonasa; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo Prais en la difusión del programa establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo Prais en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Se establecen también **beneficios educacionales** consistentes en que los hijos de los causantes que sean alumnos de Universidades, Institutos



Profesionales y Centros de Formación Técnica, sin aporte fiscal, y reconocidos por el arancel mensual de cada establecimiento.

Esta beca se encuentra normada por la Ley N° 19.123 y está destinada a los hijos de las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, hasta los 35 años de edad.

**C.) Reparaciones simbólicas.** Al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas violencia política se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, siempre discutible en sus virtudes compensatorias, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Que como una compensación satisfactiva destaca la ejecución de obras de reparación simbólica como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del día nacional del detenido desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido. c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos. d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos. e) La construcción de



«RIT»

Foja: 1

diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” en esta ciudad; y el “Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

En cuanto a las reparaciones percibidas por el demandante, indica que don ANSELMO ANTONIO CANCINO SEPÚLVEDA ha sido reparado por medio de transferencias directas de dinero, asignación de nuevos derechos y reparaciones simbólicas.

En lo específico, el demandante ha recibido beneficio conforme a las leyes 19.123, por un monto global de \$10.362.170 y conforme a la ley 19.980 ha recibido hasta el mes de enero de 2019 la suma de \$25.142.414.-, sin contar que sigue percibiendo mensualmente \$184.407.- por este último concepto.

Así las cosas, a enero de 2019, el demandante ha percibido \$35.504.584.-

En este punto, se concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH., no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto



«RIT»

Foja: 1

indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Que, las indemnizaciones solicitadas en estos autos, como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente.

Indica que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

En conclusión, expresa que la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que acompañará, es que **opone la excepción de reparación satisfactiva** por haber sido ya indemnizado el demandante.

## **II.- Excepción de Prescripción Extintiva.**

**Normas de prescripción aplicables.** Opone la excepción de prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas éstas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Que, según lo expuesto en la demanda, la detención y desaparición de su padre se verificó entre el mes de diciembre de 1973 y febrero de 1974.

Que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en febrero de 1974, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración del régimen democrático, o aun





«RIT»

Foja: 1

hasta la entrega pública del informe de la comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y 04 de mayo de 2016, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, para todos los casos.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

**En subsidio**, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

En subsidio de todo lo anterior, para el caso excepcional de que llegare a entenderse que la prescripción se cuenta desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia penal dictada por la Corte Suprema el 27 de abril de 2011, cuyo cúmplase se dictó el 10 de mayo de 2011 por la Corte de Apelaciones de Santiago (fallo que la contraria invoca como fuente de responsabilidad fiscal), de todos modos, incluso en ese improbable evento, las acciones deducidas en este juicio estarían igualmente prescritas, tanto conforme al art. 2332 del Código Civil (4 años), como en virtud del 2515 del mismo código, prescripciones ambas que opone una en subsidio de la otra, computando su plazo del modo antes señalado.

**Generalidades sobre la prescripción.** Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.



Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Como es sabido, toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público. Asimismo, cita jurisprudencia que refuerza su postura.

Agrega, que la indemnización de perjuicios tiene por fundamento dar firmeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Así, la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.



«RIT»

Foja: 1

Finalmente, señala jurisprudencia y normas de derecho internacional que apoyan su posición acerca de la prescriptibilidad de la acción ejercida en autos.

### **III.- En cuanto al daño e indemnización reclamada.**

En subsidio de las excepciones precedentes, expone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido.

Con relación al daño moral, hace presente que este dependerá de las secuelas sufridas con motivos de los hechos objeto de la demanda, y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, como ocurre precisamente con las prestaciones otorgadas en virtud de las leyes reparatorias ya invocadas.

Ha dicho la Excma. Corte Suprema: "Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido".

Así, "el juez al avaluar este daño, debe proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen, cuanto para impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para quien lo demanda."

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez solo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencias estas capacidades.

En tal sentido, las cifras pretendidas en la demanda como única y exclusiva compensación del daño moral, resultan manifiestamente excesivas,



«RIT»

Foja: 1

teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en este caso en particular y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

**IV.- En subsidio de las alegaciones precedentes de pago y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.**

Alega, que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el Tribunal debe considerar todos los pagos y la magnitud de los beneficios, especialmente educacionales, percibidos a través de los años por el demandante de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.123; 19.980) y que seguirán percibiendo a título de pensión así como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

**V.- Improcedencia del pago de reajuste e intereses en la forma solicitada.**

Hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Pues bien, a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Por otra parte, el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, resulta absurdo pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1.551 del Código Civil establece



«RIT»

Foja: 1

expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que el Tribunal decida acoger la acción de autos y condene a mi representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

En conclusión, solicita que se acojan las excepciones y defensas opuestas, rechazando la demanda en todas sus partes.

**SEXTO:** Que a folio 11, la parte demandante evacúa el trámite de la réplica, manifestando en primer lugar, que el escrito de contestación de la demandada, reconoce de modo indubitable la existencia de los hechos que motivan la presente demanda, pues no controvierte en modo alguno los hechos fundantes de la acción.

#### **I.- Excepciones y Alegaciones Fiscales. Excepción de Reparación del Daño Causado.**

Refiere que en la presente causa no consta una pluralidad de “demandantes”, ni se trata del secuestro calificado de sus “respectivos familiares”, sino que de un solo demandante persona natural, como es don Anselmo Antonio Cancino Sepúlveda, y que se origina la presente causa del secuestro calificado de un solo familiar directo como es su padre, don Anselmo Antonio Cancino Aravena, por lo que la excepción está planteada en forma errónea.

Agrega que, si bien lo antes planteado, puede perfectamente suponer la improcedencia de la pretendida excepción opuesta por defectos en su formalización, en cuanto al sustrato mismo de la defensa planteada, indica que el demandado realiza una laboriosa actividad en que pretende sistematizar de un modo general el proceso de la presunta indemnización de los perjuicios derivados de las denominadas violaciones de los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado de Chile ocurridas entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1990, en lo que denomina la “justicia transicional”. Ésta supone dar por establecidas 3 tipos de compensaciones, como son las transferencias directas de dinero a las víctimas o sus familiares; las asignaciones de derechos sobre prestaciones



«RIT»

Foja: 1

estatales específicas, y por último las reparaciones simbólicas, todo ello derivado de lo contemplado en la Ley 19.123 y las demás leyes complementarias dictadas sobre la misma materia.

Expresa, que sin perjuicio de lo expresado por el Fisco, la acción civil aquí deducida, lo ha sido para obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados al demandante con el excesivo, ilegítimo y gravísimo actuar de los agentes del Estado cometidos en la persona de su padre, demanda que encuentra su fundamento en los Principios Generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y su consagración normativa en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra de todo el daño causado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5º, inciso segundo, y 6º, ambos de la Constitución Política de la República, en consonancia con lo prescrito por el artículo 3º de la Ley N°19.585 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

En el sentido anterior, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a las reglas del Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Tratándose de normas supralegales, de rango superior a la Ley nacional estatal, éstas imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, especialmente extensivo a los propios Tribunales de Justicia de los Estados signatarios, en el sentido que no pueden interpretar los preceptos de Derecho Interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran este derecho a la reparación íntegra, lo que podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Por lo tanto, la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional, no siendo



Foja: 1

atendible la posición expuesta por el Fisco demandado que supone una reparación incompatible entre las establecidas por leyes especiales con la que motiva la presente acción, pues toda la normativa contemplada por la Ley 19.123 y otras relacionadas, sólo establecen un sistema de pensiones asistenciales, y por cierto no se prescribe incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue, no siendo procedente pretender que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas y familiares de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación asumidas por el Estado voluntariamente, lo cual no puede importar la renuncia de una de las partes, o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la Ley.

## **II.- Excepción de Prescripción Extintiva.**

Además, señala que el Fisco opone la excepción de prescripción extintiva bajo tres supuestos. En el primero, se opone la prescripción liberatoria de 4 años, en subsidio de lo anterior, se opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil y en subsidio de todo lo anterior, para el caso excepcional de que se llegare a entender que la prescripción se cuenta desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia penal dictada por la Excma. Corte Suprema el 27 de Abril de 2011, cuyo cúmplase se dictó el 10 de Mayo de 2011 por la Corte de Apelaciones de Santiago, caso en el cual, de todos modos, las acciones deducidas en este juicio estarían prescritas tanto conforme el artículo 2332 del Código Civil en el plazo de 4 años, como en virtud del artículo 2515 del mismo Código legal.

La excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile demandado en la presente causa es absolutamente improcedente en cuanto a la forma. En efecto, consta en autos que en el escrito de contestación del Fisco demandado, se señala expresamente que la acción civil interpuesta se encontraría prescrita ya que indica textualmente: “...según lo expuesto en la demanda, la detención y desaparición de la víctima don José Gabriel Campos Morales se produjo entre el mes de diciembre de 1973 y febrero de 1974.”. Incluso en la página 18 del escrito de contestación aludido se



«RIT»

Foja: 1

expresa textualmente lo siguiente: “En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.”. Pues bien, consta en autos que el demandante de autos es don Anselmo Antonio Cancino Sepúlveda, quien demanda al Estado de Chile para hacer efectiva su responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a su persona por el delito de secuestro calificado de su padre, don Anselmo Antonio Cancino Aravena, hecho ilícito realizado por los agentes del Estado debidamente condenados en el proceso penal respectivo, ocurrido en la ciudad de Linares entre los meses de Septiembre de 1973 a Febrero de 1974, hechos que, como ya hemos visto, no son controvertidos en el presente juicio. Por lo tanto, la excepción de prescripción extintiva opuesta es completamente improcedente, pues se ha opuesto respecto de la detención y desaparición de una presunta víctima llamada José Gabriel Campos Morales.

Expresa, que si bien lo anteriormente planteado es suficiente para decretar la absoluta improcedencia de la pretendida excepción opuesta, y sin perjuicio de lo dicho, la excepción de prescripción extintiva opuesta, en todas sus variantes formuladas, es absolutamente infundada en el fondo. En efecto, el Fisco demandado realiza una laboriosa actividad en que pretende sostener la imprescriptibilidad de la acción civil de autos, a diferencia de lo que ocurriría en materia penal, en la que sí operaría la imprescriptibilidad de la misma destinada a perseguir la responsabilidad criminal de los agentes del Estado en materia de delitos atentatorios contra los Derechos Humanos y de lesa humanidad.

Reitera que la acción civil aquí deducida, y cuyos hechos fundantes no son controvertidos, apunta a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados a su representado con el excesivo, ilegítimo y gravísimo actuar de los agentes del Estado cometidos en la persona de su padre, demanda que encuentra su fundamento en los Principios Generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y su consagración normativa en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra de todo el daño causado, en virtud de lo





«RIT»

Foja: 1

dispuesto en el artículo 5º, inciso segundo, y en el artículo 6º, ambos de la Constitución Política de la República.

En el sentido anterior, no siendo controvertido por el demandado que se trata de un delito de lesa humanidad, cometido por agentes del Estado, declarado por sentencia definitiva ejecutoriada condenatoria, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta lógico ni coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción liberatoria contempladas en la ley civil interna del Estado suscriptor de las Convenciones y Tratados Internacionales que rigen la materia, ya que ello sería radicalmente contrario a la voluntad expresa manifestada por esta normativa internacional sobre Derechos Humanos, la que es parte integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política del Estado.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir y separar ambas acciones, penal y civil, y pretender otorgarles un tratamiento desigual, resulta manifiestamente discriminatoria e injustificada, y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de Derecho auténticamente democrático. En efecto, pretender la aplicación al caso sub lite de las disposiciones del Código Civil en materia de la determinación y sanción de la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad cometidas con la activa participación del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente. En este sentido, la imprescriptibilidad de las acciones penales y civiles se relaciona directamente con la efectiva reparación integral del menoscabo producido, cuestión no discutida en modo alguno en el plano jurídico internacional, puesto que no se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se extiende necesariamente hacia el mismo Estado.

### **III.- Daño e Indemnización Reclamada. Alegaciones Finales.**

En este apartado el Fisco formula dos alegaciones o defensas en carácter de subsidiarias a las excepciones indicadas. La primera, trata de la fijación de la indemnización del daño moral demandado, y la segunda se basa en que el monto de la indemnización de perjuicios a determinar en favor de mi representado debe guardar armonía con los pagos recibidos por



«RIT»

Foja: 1

éste del Estado, así como con los montos determinados por este concepto por los Tribunales de Justicia.

Respecto de la primera alegación, el Fisco demandado la hace consistir, en síntesis, en la “...imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria” del daño moral por su carácter de daño no patrimonial, agregando que “el daño moral no se borra por la indemnización”. De aquí extrae la conclusión que el monto demandado le resulta excesivo, y que el Tribunal debe actuar con mucha prudencia en el tema.

Sobre lo indicado, señala que su parte está muy consciente que la indemnización solicitada no hará desaparecer ni el delito cometido por los agentes del Estado, ni la privación de la persona del padre de su representado, ni la imposibilidad de haberlo conocido un instante siquiera, ni de haber nacido en estado de prisión de su madre en calidad de presa política, ni de todos y cada uno de los hechos aceptados y no controvertidos de este juicio, sino que se busca el justo resarcimiento de todos y cada uno de los daños y perjuicios experimentados por el demandante en su vida a consecuencias del incalificable actuar de los agentes del Estado.

En cuanto a la segunda alegación fiscal, en orden a solicitar que la posible indemnización a fijarse en la presente causa en armonía con los pagos efectuados a mi representado por concepto de la Ley N°19.123, desnaturaliza como tal y priva de todo mérito a la excepción de reparación del daño en este carácter, opuesta en la primera sección de su contestación a la demanda de autos. En efecto, resulta absolutamente improcedente en sede lógica y jurídica que un mismo hecho sea calificado técnicamente de excepción a la acción, y también de mera alegación o defensa, las que son por naturaleza diferentes y acarrear consecuencias procesales distintas.

En la especie, la situación planteada genera el problema para su procedencia en beneficio del Fisco demandado, consistente en que una misma situación fáctica, como son los pagos realizados a su representado, no puede ser calificada de excepción y también como mera alegación o defensa, ni aun en forma subsidiaria, pues se infringe el principio lógico de la no contradicción, que impide que una cosa sea y no sea a la vez.



«RIT»

Foja: 1

Por último, acerca de la armonía que señala el Fisco demandado que debería guardar la indemnización a establecerse con los montos que fijan los Tribunales de Justicia en las causas análogas sobre violaciones a los Derechos Humanos, su parte señala que la alegación fiscal resulta improcedente e injustificada, pues el quantum del resarcimiento será indudablemente fijado por el Tribunal, conforme el mérito de los antecedentes de esta causa en particular, en especial ante la importante magnitud del daño efectivamente causado en relación a los hechos no controvertidos fundantes de la acción.

**SÉPTIMO:** Que la parte demandada, a folio 13, evacúa el trámite de la dúplica, reiterando todo lo señalado en la contestación de la demanda, sin perjuicio de ello agrega:

**I.- En lo referente a la excepción de pago.**

La ley 19.123 tuvo un fin indudablemente reparatorio, según allí mismo se expresa. Dicho mecanismo indemnizatorio establecido por la ley, es sin duda, especial y transpone un sistema que el Estado asumió voluntaria y directamente en favor de estas personas, para la reparación de daños morales. Por lo anterior es excluyente de otras indemnizaciones, tanto porque sus beneficios son renunciables, como por cuanto la ley sólo la hace compatible con otras pensiones. Ello determina que la indemnización demandada sea improcedente, por ser incompatible con los beneficios ya otorgados por el Estado todo lo cual constituye una excepción de pago, y no solo una incompatibilidad.

Resulta evidente que cada persona tiene derecho a estimar que no ha sido suficientemente resarcida por el beneficio que la ley otorga, pero debe tenerse en consideración que el Estado en su conjunto hace un esfuerzo para otorgar no sólo una pensión, sino que además consagra otros beneficios sociales de salud y de apoyos técnicos y de rehabilitación para la superación de lesiones surgidas a consecuencia de la prisión política o la tortura.

No se debe dejar de tener en consideración que en el caso de autos, se otorgaron los beneficios de reparación de las Leyes N° 19.123 y N° 19.980 al demandante según detalle:



Causante : CANCINO ARAVENA ANSELMO ; Ley N° 19123, Rettig

RUT	DEMANDANTE	PERIODO	MONTO PENSION PAGADA	AGUINALDOS	BONO LEY N°19880	BONIF. COMPENSATOR IA	MONTO GLOBAL	NORMA LEGAL
14289998-1	CANCINO SEPULVEDA ANSELMO A	07-1991 al 12-1999	\$ 3.401.151	\$ 110.170	\$ 6.598.849	\$ 252.000	\$ 10.362.170	LEY N°19.123

  

RUT	DEMANDANTES	PERIODO	MONTO PENSION PAGADA	AGUINALDOS	APORTE UNICO	MONTO GLOBAL	MONTO MENSUAL	NORMA LEGAL
14289998-1	CANCINO SEPULVEDA ANSELMO A	02-2005 AL 01-2019	\$ 24.709.239	\$ 433.175	\$ 1.000.000	\$ 25.142.414	\$ 184.407	LEY N°19.992

Santiago, 22 enero 2019

  
VERONICA SANCHEZ GONZALEZ  
División Beneficios  
R.S.

Estando entonces las acciones alegadas en estos autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, es que se debe acoger la excepción de pago opuesta en la contestación por haber sido ya indemnizado el hecho o la falta de legitimación activa del demandante, por haber sido ya indemnizados por los mismos hechos.

II.- En lo referente a la excepción de prescripción extintiva.-

Expresa que la parte demandante, en la réplica, repite argumentaciones dadas en la demanda, confundiendo la imprescriptibilidad de las acciones penales previstas en el derecho internacional para los delitos de lesa humanidad, con las acciones civiles indemnizatorias.

Ante ello, frente a la reiteración de afirmaciones acerca de la improcedencia de aplicar normas de derecho interno, en razón de tratarse de crímenes de lesa humanidad, cabe señalar que esta parte ha dejado claramente establecido en la contestación de la demanda que al tenor de nuestro derecho interno y de la jurisprudencia reiterada habida en torno al tema, que los tratados citados no establecen conceptos de imprescriptibilidad coma los que se alegan. Se argumenta también acerca de la existencia de un error de la defensa fiscal, al postular la aplicación de las normas del derecho privado. En este sentido las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo 1º, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado y entre ellas está el Art. 2.497 C.C. que manda aplicar las normas de la prescripción a favor o en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra



«RIT»

Foja: 1

del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de to suyo.”. Asimismo, existen recientes y reiterados pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema que han acogido la procedencia de aplicar las normas del derecho común relativas a la prescripción en esta clase de juicios.

**III.- El daño moral debe ser legalmente acreditado por quien lo demanda.**

Reitera lo expuesto en la contestación de la demanda, en orden a que las manifestaciones del daño moral deben ser legalmente probadas. En doctrina se ha sostenido que: “(...) todo daño debe probarse, sea patrimonial o sea extrapatrimonial. El método y el objeto sobre que recae la prueba, y su extensión, serán diferentes según sea la clase de daño; pero esa es una cuestión aparte y no hace excusable la prueba que se ha de rendir en todo caso” (FUEYO LANERI, FERNANDO: “Interpretación y Juez”. Santiago, 1976, pag.73). Sostener lo contrario implicaría vulnerar el mencionado principio, alterando la carga de la prueba y obligando al demandado a acreditar un hecho negativo, cual es, “la no existencia de perjuicio extrapatrimonial”, situación antijurídica e injusta. Puesto que, normalmente el demandado ignora las condiciones personales y familiares del actor, como en el caso de autos, haciéndose materialmente imposible controvertir sus pretensiones, aunque los hechos en que se apoyan carezcan de fundamento en la realidad.

**OCTAVO:** La parte demandante para acreditar sus alegaciones se valió de los siguientes medios de prueba:

**Instrumental:** El actor acompañó los siguientes documentos: 1. Certificado de nacimiento de Anselmo Antonio Cancino Sepúlveda; 2. Copia certificado de nacimiento con subinscripción - reconocimiento de paternidad; 3. Copia de anexo “Menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres”, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; 4. Copia simple de sentencia emitida con fecha 03 de abril de 2008 por el Ministro de Fuero don Alejandro Solís Muñoz, en autos Rol N° 2.182-1998; 5. Copia simple de sentencia emitida por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 14 de diciembre de 2009 en autos Rol N°



«RIT»

Foja: 1

2084-2008; 6. Copia simple de resolución emitida por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 16 de diciembre de 2009 en autos Rol N° 2084-2008; 7. Copia de sentencia emitida por la Excma. Corte Suprema de Justicia de fecha 27 de abril del año 2011, en autos Rol N° 2263-2010; 8. Copia simple de sentencia de reemplazo emitida por la Excma. Corte Suprema de Justicia de fecha 27 de abril del año 2011, en autos Rol N° 2263-2010; 9. Copia simple de oficio N° 5062-2011 emitido por la Excma. Corte Suprema de Justicia con fecha 03 de mayo del año 2011; 10. Copia simple de "cúmplase" emitido por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 10 de mayo del año 2011 en autos Rol N° 2084-2008; 11. Escritura pública de mandato judicial, de fecha 08 de mayo de 2018, otorgada en la Notaría Pública de don Ricardo Reveco Sepúlveda, Repertorio N° 13.536, donde consta el poder de los abogados Alejandro Vignolo Morris y Luis Felipe Ossandón Gutiérrez para representar judicialmente a Anselmo Cancino Sepúlveda.

A folio 26: 1.- Copia de la Sentencia Definitiva dictada en la Causa Voluntaria Rol 1146-92, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Linares, de fecha 17 de Marzo de 1993, la cual acoge la demanda de reconocimiento de filiación de don Anselmo Antonio Cancino Sepúlveda respecto de su padre, don Anselmo Antonio Cancino Aravena; 2.- Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, Volumen II, Tomo 3, sobre Nombres, Datos y Biografía de las Víctimas, en cuya página 67 se consigna a don Anselmo Antonio Cancino Aravena como detenido desaparecido en Linares en Enero de 1974; 3.- Publicación de fecha 3/4/2019, efectuada en el sitio web : <https://www.memoriaviva.com/desaparecidos/D-C/can-ara.htm>; 4.- Informe Psicológico de don Anselmo Antonio Cancino Sepúlveda, elaborado por la ONG CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, de fecha 10 de Agosto de 2018, firmado por la psicóloga clínica, doña Lorena Pérez Osorio; 5.- Informe Psicológico de don Anselmo Antonio Cancino Sepúlveda, elaborado por el CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, de fecha 1° de Octubre de 2018, firmado por su Director Ejecutivo, don José Miguel Guzmán Rojas.

A folio 32: 1. Copia de la Demanda Civil presentada en la Causa Civil caratulada “Sepúlveda y Otros con Consejo de Defensa del Estado”,



«RIT»

Foja: 1

Causa Rol N°675-2016, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Talca; **2.** Copia de la Sentencia Definitiva dictada en la Causa Civil caratulada “Sepúlveda y Otros con Consejo de Defensa del Estado”, Causa Rol N°675-2016, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Talca; **3.** Copia de la Sentencia dictada en el Recurso de Apelación en la Causa Civil caratulada “Sepúlveda y Otros con Consejo de Defensa del Estado”, Rol I. C. A. N°640-2017, dictada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Talca, de fecha 13 de Diciembre de 2017; **4.** Copia de la Sentencia dictada en el Recurso de Casación en el Fondo en la Causa Civil caratulada “Sepúlveda y Otros con Consejo de Defensa del Estado”, Rol E. C. S. N°2471-2018, dictada por la Ecxma. Corte Suprema de Justicia, de fecha 06 de Marzo de 2018.

**Testimonial:** Igualmente, se valió de la declaración de la testigo María Elizabeth Morales Silva, quien previamente juramentada declaró que conoce de hace muchos años al demandante, siendo apoderada de él en el colegio, durante la época en la que vivió en su casa, un año y medio aproximadamente, en la ciudad de Santiago.

Señala que cuando llegó a su casa, el demandante estaba muy triste por sus problemas familiares originados con la pérdida de su padre, teniendo además una niñez muy triste.

**NOVENO:** Que, por su parte, la demandada se valió de los siguientes medios de prueba:

**Instrumental:** Acompañó a su contestación: **1.** Copia de sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Ecxma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos Rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”, y **2.** Copia de oficio Ord. N° 600-3-9-2019 del Director Regional del Instituto de Previsión Social de la Región del Maule. Además, a su escrito de duplica acompañó: **3.** el Oficio Ordinario N° 600-3-2019 de 22-1-19, emitido por el Director Regional del Instituto de Previsión Social, que da cuenta de los beneficios recibidos por los actores a través de las Leyes de Reparación.

**DÉCIMO:** Que los elementos de convicción reunidos en la causa, apreciados de conformidad a la ley, permiten tener acreditados los siguientes hechos:



«RIT»

Foja: 1

1.- Que el 08 de diciembre de 1973, Anselmo Antonio Cancino Aravena, tenía 26 años de edad, soltero, era obrero agrícola, fue secretario de la Federación Nuevo Horizonte, delegado a la Central Unica de Trabajadores, presidente del Consejo Provincial Campesino, presidente del Movimiento Campesino Revolucionario y militante del Movimiento de izquierda Revolucionaria (MIR).

2.- Que Anselmo Antonio Cancino Aravena fue detenido en Cauquenes el 08 de diciembre de 1973, por una patrulla militar que lo trasladó a la Escuela de Artillería de Linares.

3.- Que el día 12 de enero de 1974 Anselmo Antonio Cancino Aravena, fue sacado de la Escuela de Artillería, junto a otros detenidos y desde esa fecha se desconoce su paradero.

4.- Que se condenó a Claudio Abdón Lecaros Carrasco, Antonio Aguilar Barrientos y Félix Renato Cabezas Salazar, como autores del delito de secuestro sobre la persona de don Anselmo Antonio Cancino Aravena.

5.- Que el demandante, Anselmo Antonio Cancino Sepúlveda, es hijo póstumo de don Anselmo Antonio Cancino Aravena, teniendo escasos meses de gestación a la época de desaparición de su padre.

6.- Que el reconocimiento como hijo recién pudo obtenerlo a través de sentencia judicial dictada el 17 de marzo de 1993.

7.- Que el demandante se encuentra reconocido en el anexo de “Menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres” de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech).

8.- Que el demandante, a raíz del secuestro de su padre, quien tiene la calidad de detenido desaparecido, fue privado del auxilio y protección de éste durante toda su vida, originándose con ello una serie de sufrimientos y desamparos; así, el secuestro de su padre alteró toda la vida del demandante, significándole un desarraigo familiar y graves padecimientos, que quedan demostrados con la sola constatación del ilícito cometido por agentes del Estado, demostrados a través de la declaración de la testigo ofrecida y, especialmente, a través de los informes psicológicos elaborados por el CINTRAS y acompañados a folio 26.





«RIT»

Foja: 1

9.- Que el demandante, a enero de 2019, ha percibido pensiones de reparación establecidas en las leyes 19.123 y 19.992, por la suma total de \$35.504.584.-

**UNDÉCIMO: En cuanto a la excepción de pago de reparaciones satisfactivas.**

La parte demandada, invocando el otorgamiento de las pensiones y beneficios establecidos en las leyes 19.123 y normas conexas, ha alegado la reparación satisfactiva de los daños ocasionados y, por ende, encontrarse satisfechas las pretensiones indemnizatorias que pretende el demandante, por estimar el Fisco que ya se encuentran indemnizados los daños, como extensamente se argumentó en los escritos de contestación y de dúplica.

A este respecto, el tribunal estima que el otorgamiento de las pensiones y demás asignaciones que se concedió a las víctimas de violaciones de derechos humanos por las leyes 19.123 y demás conexas, no constituyen un obstáculo para reclamar las indemnizaciones que el actor estima que le corresponden, atendido el perjuicio que se le produjo por los crímenes de lesa humanidad perpetrados después del golpe militar de 1973 en nuestro país, específicamente del que fue objeto su padre. En efecto, la ley en estos casos es de carácter asistencial y de manera alguna puede reflejar el dolor y perjuicio efectivamente causado en las víctimas, ya que son éstas quienes pueden determinar si las reparaciones legales son suficientemente adecuadas para paliar el daño causado.

Siguiendo al respecto a nuestra Excma. Corte Suprema en sentencia reciente, se indica que no es posible aceptar la alegación de pago, que en los términos de este juicio ha formulado el Fisco de Chile; así, se señala: “Que estas mismas reflexiones impiden aceptar la alegación del Fisco de Chile de declarar improcedente la indemnización que se ha demandado por el actor en razón de que obtuvo pensiones de reparación de conformidad a la Ley N° 19.123 y sus sucesivas modificaciones, pues esa pretensión contradice lo dispuesto en la normativa internacional antes señalada y porque el derecho común interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, como también se razonó, de modo que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas en



«RIT»

Foja: 1

función de otros preceptos de derecho patrio. La normativa invocada por el Fisco -que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación antes señalada en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado, es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar la existencia del hecho dañoso y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso no ha sido cuestionado”. (CORTE SUPREMA, Arturo Hillers / Fisco, Rol N° 173-2016, 20 de junio de 2016).

De esta manera, no resulta posible impedir al demandante reclamar las indemnizaciones que estime para que se compense efectivamente el daño causado, o en la forma que más se acerque a dicha compensación, pues el otorgamiento de pensiones y asignaciones por la vía legal, no impide reclamar a la justicia la reparación de los perjuicios que los delitos o crímenes le provocaron, sin perjuicio del monto que en definitiva establezca el tribunal.

Debe asimismo, tenerse presente que la acción civil aquí deducida en contra del Fisco de Chile, tendiente a obtener la compensación íntegra de los perjuicios ocasionados al demandante de autos, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, conforme con lo establecido en el artículo 5° inciso 2° y artículo 6° de la Constitución Política de la República.

**DUODÉCIMO: En cuanto a la prescripción.**



«RIT»

Foja: 1

Que el Fisco de Chile ha alegado la excepción de prescripción extintiva de las acciones deducidas en autos, invocando en primer lugar la prescripción de cuatro años que establece el Código Civil para la responsabilidad extracontractual, contados, a lo más, desde que se hizo público el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación el 11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991.

En subsidio, opuso la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Además, en subsidio de todo lo anterior, para el caso excepcional de que llegare a entenderse que la prescripción se cuenta desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia penal dictada por la Corte Suprema el 27 de abril de 2011, cuyo cúmplase se dictó el 10 de mayo de 2011 por la Corte de Apelaciones de Santiago, de todos modos las acciones deducidas en este juicio estarían igualmente prescritas, tanto conforme al art. 2332 del Código Civil (4 años), como en virtud del 2515 del mismo código, prescripciones ambas que opone una en subsidio de la otra, computando su plazo del modo antes señalado.

Al respecto, cabe señalar que la acción civil deducida en esta causa, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales, como ya se ha dicho, obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, por mandato de la Constitución Política de la República.

Debe tenerse presente entonces que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las cuales no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos del derecho interno, en este caso las normas de prescripción del Código Civil, pues, si se verifica un hecho ilícito



«RIT»

Foja: 1

imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de dicho Estado por haberse infringido normas internacionales, lo que implica el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

De esta manera, estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, los cuales no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

En razón de lo anterior, el tribunal estima que en el caso de autos, no resultan aplicables las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles para hacer reclamar indemnización de perjuicios, ya que dichas normas son contrarias a lo dispuesto en la normativa internacional, en cuanto a disponer la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad, ya que conforme a la normativa internacional sobre derechos humanos, dichas acciones son imprescriptibles.

En efecto, el artículo 38 letra c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dispone: "La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas". Y los principios generales del derecho reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos, lo que se extiende al Estado.

Al respecto, nuestra Excma. Corte Suprema en sentencia reciente ha declarado: "Que en esta clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, la que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos



Foja: 1

los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación entre ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes como el de la especie, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta improcedente, por cuanto la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código reconoce, al estipular en el artículo 4° que las disposiciones especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código, lo que es pertinente a las nuevas realidades y situaciones emergentes, como sucede en este caso, al tratarse de una materia con postulados diversos y a veces en pugna con los del derecho privado regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse, pues se trata de una rama emergente, representativa de la supremacía de su finalidad centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, por lo que se aparta de los postulados que son propios del derecho privado”. (CORTE SUPREMA, Arturo Hillers / Fisco, Rol N° 173-2016, 20 de junio de 2016; y Montecinos Undurraga / Fisco, Rol N° 14.346-2016, 08 de junio de 2016)

De esta manera, en el caso de autos, y atendido los hechos y el contexto en que estos fueron cometidos, con la intervención de agentes del Estado, conlleva la imposibilidad de declarar la prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, para reclamar el daño causado por dichos hechos, los que como se dijo, fueron cometidos por el Estado de Chile, vulnerando derechos fundamentales.



«RIT»

Foja: 1

**DECIMOTERCERO:** Que, conforme con lo razonado en los motivos que anteceden, y encontrándose acreditado en autos que el padre del demandante fue víctima del crimen de secuestro cometido por agentes del Estado de Chile, teniendo la calidad de detenido desaparecido, además, de estar acreditado, a través de la prueba rendida, el padecimiento del demandante a raíz de la desaparición de su padre y la consecuente falta en toda su vida, se hará lugar a la indemnización de perjuicios por daño moral solicitada, la que se regula prudencialmente, y tomando en consideración también las pensiones y asignaciones que por ley se le han concedido al demandante de manera paliativa del dolor, en la suma de \$40.000.000.- que deberá pagarse con los reajustes e intereses que se indicarán en la parte resolutive de la sentencia a fin de mantener el valor de la indemnización.

Y de conformidad además, con lo dispuesto en los artículos 5, 6, 38 de la Constitución Política de la República; 3, 4 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; Ley 19.123 y 19.980; 2314 y siguientes del Código Civil; 144, 170, 342, 346, 384, 426, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

**I.-** Que **SE RECHAZA** la tachada deducida por el Fisco de Chile a folio 31.

**II.-** Que **SE ACOGE** la demanda de folio 1 deducida por **ANSELMO ANTONIO CANCINO SEPULVEDA**, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por el abogado procurador fiscal don José Isidoro Villalobos García Huidobro, y en consecuencia **se condena al Fisco de Chile** a pagar al demandante la suma de **\$40.000.000.- (CUARENTA MILLONES DE PESOS)** por concepto de indemnización por daño moral, reajustados en la proporción que experimente el Índice de Precios al Consumidor más intereses corrientes para operaciones reajustables, desde la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo, con costas.

Regístrese, notifíquese, **CONSÚLTESE** si no se apelare, y archívese en su oportunidad.

**Rol N° C-3476-2018.**



«RIT»

Foja: 1

Dictada por don Eric Sepúlveda Casanova, Juez Titular; autoriza don Juan Carlos Carrillo Pino, Secretario Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Talca, veintisiete de Noviembre de dos mil diecinueve**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>